

poca o nula implantación de los partidos en muchas regiones. En ese contexto, es difícil organizar una oposición política centralizada y coherente.

Colofón

Es probable que esta situación de aparente quietud se mantenga hasta fin de año. Las elecciones regionales —y no necesariamente las luchas sociales— serán el terreno en el cual se definan, probablemente, los próximos liderazgos y correlaciones políticas en el país. Sin embargo, sería un error creer que la actual «tranquilidad social y política» es un síntoma de que los malestares que se manifestaron en las últimas elecciones se han disipado y de que los «temores» vividos fueron flor de un día, es decir, un susto pasajero que es mejor olvidar. Hay que recordar que si bien Alan García ganó en la segunda vuelta con los votos de Unidad Nacional, ello no significa que el rechazo de amplios sectores a la política eco-

nómica haya desaparecido. En el triunfo de Alan García más pesó el temor a Ollanta Humala que el continuismo económico.

Tengo la impresión, como se dice, de que estamos bailando sobre un volcán. La «era de la armonía», como ha dicho Jaime de Althaus, está lejos de conseguirse. Para ello se tendría, primero, que escuchar lo que ha dicho una mayoría de peruanos en estas últimas elecciones, y luego, gobernar en función de ellos. Y si bien es cierto es prematuro decir cuál será la dirección de este gobierno, me temo que las primeras señales indican que no se va por ese camino sino más bien por otro que ignora lo sucedido. Sin embargo, mientras la protesta y los malestares no creen una representación política organizada, lo más probable es que vivamos una calma chicha, hasta una próxima explosión, acaso más radical, del volcán. Mientras tanto, como dice el título de una película: ¿bailamos? ■

EN EL UMBRAL DE UN NUEVO GOBIERNO

Heraclio Bonilla

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

El 28 de julio de 2006, el doctor Alan García Pérez, líder principal e indiscutido del APRA, dio inicio a un nuevo gobierno, luego de una ajustada victoria electoral sobre el señor Ollanta Humala en la última ronda de las elecciones presidenciales. Se trata de su segunda experiencia como presidente. Los resultados del primer periodo —entre 1985 y 1990— no convencen ni a sus propios partidarios.

Como candidato, el presidente prometió que si los electores y la Providencia le daban una nueva oportunidad, enmendaría aquellos errores y encaminaría al país por la senda del crecimiento. Ahora tiene esa oportunidad y solo cabe esperar —por el bien del Perú, de su partido y del suyo propio— que alcance las metas que se propone, porque el abismo en el que nos encontramos ha alcanzado sus límites, y es poco probable que la impaciencia y la rabia de la mayoría de los peruanos puedan aplacarse a través de los marcos institucionales que se conocen.

A diferencia del inicio de su primer gobierno, cuenta a su favor con tres factores nuevos: reservas interna-

cionales, una tasa de crecimiento por encima del incremento de la población —para muchos, traducida solo en guarismos de espejismo que no se condicen con un imperceptible «goteo»—, y la extinción de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Incluso las fuerzas de su principal adversario, el señor Humala, empezaron a disgregarse al día siguiente de la primera vuelta, como era de esperarse en formaciones políticas cuyo liderazgo obedece más al oportunismo que a la convicción.

Si esos son los datos nuevos, la continuidad y la permanencia están representadas por la pobreza y la miseria, particularmente visible en las vastas áreas rurales del Perú, de la costa y de la sierra, y cuya población, de manera masiva, tradujo su descontento a través de su inequívoco respaldo electoral a la candidatura del señor Humala.

Esa exclusión, por cierto, no es nueva, porque en su versión moderna se remonta por lo menos hasta mediados del siglo XX, sin que los sucesivos regímenes democráticos que se sucedieron luego del retorno de

las fuerzas armadas a sus cuarteles, en 1980, hayan hecho nada significativo para aliviarla. Por el contrario. Y es que en el Perú, al igual que en el conjunto de América Latina, se puede constatar que la democracia, entendida como un simple rito periódico de retorno a las ánforas, es incapaz de resolver problemas centrales de la población como son los relacionados con el empleo, la educación, el ingreso adecuado y la salud. Estos temas también forman parte intangible de irrenunciables derechos humanos que, en principio, todo sistema democrático debería proteger.

Sería prematuro juzgar, a partir del programa de gobierno aprista y del discurso inaugural del presidente, si las medidas son o no suficientes para enfrentar los inmensos desafíos que es preciso enfrentar. No solo porque en el marco de la cultura política peruana existe una oposición entre lo que se promete y lo que —con toda impunidad— se termina haciendo, sino también porque el presidente no es un nuevo Mesías, en la medida en que debe atender las presiones contradictorias de las fuerzas que representa —lo que se refleja en la composición de su primer gabinete— y porque tiene que actuar en un terreno en el que muchas fuerzas, particularmente las internacionales, escapan por completo a su control. En este contexto, otorgarle el beneficio de una duda esperanzada y razonable, por las razones acotadas, es lo que la prudencia sugiere por ahora.

Por cierto que en el mensaje del 28 de julio hubo anuncios que no pueden sino despertar entusiasmos. En particular aquellos referidos a la reducción de los monumentales ingresos de funcionarios públicos que, en lugar de servir, se sirven de sus funciones, generando una afrenta a la condición de los humildes. Desde la dorada época del guano, por lo menos, y dada la vulnerabilidad de la economía peruana, los «hijos del país», como se llamaba entonces a los burócratas, terminaron convirtiéndose en los «hijos del Estado», porque convirtieron las arcas fiscales en un apetecible «botín» que podía ser saqueado y depredado. Por consiguiente, no es casualidad que en cada una de las elecciones, el volumen de candidatos a la presidencia, al Congreso y a los gobiernos regionales y locales aumente geométricamente, porque es una espléndida oportunidad para que desempleados e incompetentes acumulen riquezas en forma ilícita con la cómoda coartada de «servir al pueblo». Después de todo, el Perú acaba de tener el dudoso privilegio de contar con el presidente mejor pagado del planeta entero, y eso solo en términos de sus ingresos formales...

No es menos loable que se anuncie que el dinero ahorrado en el marco de esta política de austeridad —pese a que una remuneración de 15.600 soles mensuales a parlamentarios con una productividad nula es claramente excesiva— será usado en la instalación de servicios elementales como agua y luz en centros poblados hasta hoy excluidos. Y que esa austeridad fiscal que se proclama sirva también como antídoto a toda tentación «populista», en la que el derroche y la prodigalidad se usen para comprar la impaciencia de los insatisfechos. Pero esas buenas intenciones son claramente insuficientes.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a mediados de la década de 1970 el porcentaje de los salarios representaba cerca de la mitad del PIB, para descender a menos de la cuarta parte en 2004, mientras que la proporción de las ganancias subió, entre 1991 y 2004, de 52,7% a un 60,6%. Dicho de otra manera, cifras como estas, cuya difusión le valió ser arrojado del país a un funcionario competente, hablan del deterioro creciente de la distribución del ingreso, para no mencionar el proceso opuesto de concentración de la riqueza y de la propiedad. Inequidad que, de no ser resuelta, compromete no solo la estabilidad democrática sino las chances del propio crecimiento de la economía.

Para revertir esta situación, Alan García, en un importante documento —*Sierra exportadora, empleo, modernidad y justicia en los Andes*, Lima, 2005—, propuso que en los próximos cuatro años se vinculara al mercado internacional la producción de 150 mil hectáreas ubicadas principalmente en los ocho departamentos más deprimidos de la sierra peruana, con la esperanza de reproducir la relativa experiencia exitosa de Piura e Ica, y de esa manera generar empleo e ingresos para segmentos significativos de la población rural. Aquí el problema radica en el anclaje social de esta experiencia y en los efectos contradictorios de un tratado de libre comercio cuyos términos fueron negociados en secreto por la administración de Alejandro Toledo. En el inicio de esta experiencia, se propone privilegiar a aquellas unidades que tienen como promedio 4,7 hectáreas, pero esto implica el riesgo de profundizar las brechas entre los campesinos, exactamente como ocurrió con la reforma agraria del general Juan Velasco, en circunstancias, además, en las que el vendaval del libre comercio podría convertir en inútiles estos esfuerzos.

Para nadie es un secreto, por otra parte, que el crecimiento de la economía peruana de los últimos años estuvo jalonado por las exportaciones, y que el buen

desempeño de estas últimas, como otra letanía permanente de la historia económica del Perú, dependió de factores que escapan al control completo de las políticas económicas de gobiernos tan prescindibles como el de Toledo, es decir, del incremento de los precios de los minerales exportables al mercado internacional. Esas circunstancias son totalmente aleatorias y fortuitas, como las que ocurren en los casinos que ahora existen donde antes estaban ubicados orgullosos parques industriales. Se trata, por lo tanto, de una riqueza fundada en la renta natural y en el errático comportamiento de sus precios en el mercado, más que en la productividad y en la eficiencia de las empresas foráneas y nativas. En ese contexto, implorar la caridad de sus agentes para que compartan algo de estas ganancias con un Estado que, al final de cuentas, tiene el control de este patrimonio, es pensar que la lógica del capital está ahora regida por los sentimientos y no por el apetito insaciable de la ganancia. Únicamente en las telenovelas los ricos también lloran...

En su primer gobierno, el entonces joven presidente Alan García despertó la admiración de muchos al proponer que el pago del servicio de la deuda externa no podía realizarse a costa del sufrimiento de su pueblo, y que por lo tanto había que limitar esa ineludible obligación al pago de un equivalente al 10% del valor de las exportaciones del país. Pero se trató de una propuesta solitaria, como en los *Cien años de soledad*, que no contó con ningún eco entre sus pares, condición indispensable para que sea escuchada la sugerencia de un país marginal, y más bien fue una de las razones que empujó al Perú al club de los parias. Esos fantasmas del pasado deben ser exorcizados si se quiere enrumbar al país por la senda de un crecimiento irreversible, que no es otra cosa, como lo enseñaron los clásicos del siglo XIX, que

el incremento del producto en condiciones de pleno empleo.

Pero no habrá crecimiento, para terminar, sin una adecuada calificación de la mano de obra, a través de una política que abra las puertas de escuelas, colegios y universidades a las mayorías nacionales. El apoyo del Estado en esta tarea es fundamental, porque la iniciativa privada en la educación persigue el lucro y profundiza las diferencias. Las experiencias exitosas —como las del Sudeste Asiático— dicen claramente, en oposición a la vulgar propaganda, que sus resortes reposaron en un pueblo educado como respuesta a la preocupación genuina de sus gobernantes y de su Estado. Desde hace mucho tiempo sabíamos que la educación no es precisamente un privilegio del Perú, pero gracias al discurso inaugural ahora nos informamos de que, además, esa lacra que es el analfabetismo forma parte importante de nuestro paisaje social. Y esas no son, precisamente, las mejores bases para esperar con confianza. En esos nubarrones —que las brumas de Lima captan bien— fue un consuelo ver en el palco oficial del desfile militar a la señora Michelle Bachelet, la mismísima presidenta de Chile, como un gesto cargado de simbolismo para conjurar los atavismos del pasado y empezar, así, a superar los complejos de la derrota.

Mas allá de estas reticencias —inspiradas por la convicción de la complejidad de los problemas del país, frente a los cuales la voluntad de uno no basta, así como también en el reconocimiento de que las pasiones y los intereses terminan confundiendo las metas que se trazan—, nadie en su sano juicio puede dejar de apostar por el éxito de esta administración. Su fracaso desatará las furias contenidas que nutren las fuerzas oscuras de la irracionalidad. ■